



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA PRIMERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, diez (10) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 05001 31 03 004 2021 00138 01

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Proceso: Ejecutivo hipotecario.

Demandante: RAMÓN ANTONIO RAIGOZA RAMÍREZ.

Demandado: CESAR AUGUSTO BOTERO GÓMEZ.

Extracto: 1. El título aportado contiene una obligación clara, expresa y exigible, sin que se desvirtuara este último elemento con el presunto pacto verbal alegado por el demandado.
2. En cuanto a intereses de mora, tampoco se demostró su ocurrencia desde la fecha indicada por el recurrente. Confirma.

ASUNTO A TRATAR

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de primera instancia calendada el veinticuatro (24) de mayo del dos mil veintidós (2022), proferida por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN.

ANTECEDENTES

DE LA DEMANDA Y LA ORDEN DE PAGO:

RAMÓN ANTONIO RAIGOZA RAMÍREZ promovió proceso ejecutivo con garantía real, en contra de CESAR AUGUSTO BOTERO GÓMEZ, pretendiendo se librara mandamiento de pago por la suma de MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.400´000.000.oo), más los intereses moratorios desde el 1° de enero de 2.021.

Como sustento de lo anterior se indicó que BOTERO GÓMEZ suscribió en favor de RAIGOZA RAMÍREZ, PAGARÉ por dicho monto, garantizando su pago con múltiples hipotecas así:

1. Mediante la Escritura 3225 del 9 de septiembre de 2.010 de la Notaría Primera de Envigado, se constituyó hipoteca sobre los inmuebles identificados con Matrículas Inmobiliarias (M.I.) 001-1038462, 001-1038463, 001-1038464, 001-1038465, 001-1038467, 001-1038468, 001-1038469, 001-1038470, 001-1038471 y 001-1038472, todos ellos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur.
2. Igual garantía se otorgó a través de la Escritura Pública 2831 del 25 de noviembre de 2.010, corrida en la Notaría Veintidós de Medellín, referente a los bienes con M.I. 001-1038466, 001-1038473 y 001-1038474, todos de la misma oficina registral.

Se precisó que todos esos bienes son de propiedad del demandado, aunque se advirtió que sobre el inmueble con M.I. 001-1038466, existe

embargo decretado por la Unidad de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín.

Mediante auto del 10 de junio de 2.021 se libró mandamiento de pago en los términos pedidos, al paso que se decretó el embargo de todas las propiedades atrás referidas¹.

DE LA CONTRADICCIÓN:

Notificado el demandado propuso las excepciones que denominó:

1. *“INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN”*. Indicando que con intermediación del hermano del demandado, FRANCISCO JAVIER BOTERO GÓMEZ, de quien dice era el encargado de los pagos, acordó verbalmente con el demandante que la fecha de pago del capital se extendía *“más allá del día 12 de abril de 2021”*, por lo que alega que se le concedió un plazo adicional.
2. *“INDEBIDA PRETENSIÓN DE PAGO DE INTERESES MORATORIOS”*. Alegando que la pretensión desde el 1° de enero de 2.021 es indebida, pues como pagó los intereses de enero y febrero de ese año, la mora sólo se configuraría a partir del 1° de marzo de 2.021.

¹ Archivos 02 y 05 Expediente Digital (E.D.).

3. “*APLICACIÓN DEL PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO REBUS SIC STANTIBUS*”. Argumentando que a pesar de las cláusulas pactadas, si las condiciones y circunstancias dan cuenta que para una de las partes es excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones periódicas, el pacto debe ser revisadas por el Juez en busca de la equidad en el contrato (teoría de la imprevisión), tal como está consagrado en el artículo 868 del Código de Comercio.

Recalcó que paga intereses por VEINTIÚN MILLONES DE PESOS (\$21´000.000.00), pero debido a la imprevista pandemia (COVID – 19), con posterioridad al contrato de hipoteca y al mutuo, se vio obligado a cerrar sus establecimientos de comercio, hecho conocido por el actor y que generó su crisis financiera.

Por lo anterior solicitó al acreedor verbalmente, la revisión bilateral del contrato en busca de un mayor plazo y menor tasa de interés, “*sin que haya sido posible llegar a un acuerdo distinto del mencionado al pronunciamiento a los hechos 5 y 9 de la demanda.*”, de ahí la aplicación de la teoría de la imprevisión, así como la misma buena fe constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Después de recapitular acción y contradicción, enmarcando esta última en el numeral 13 del artículo 784 del C. de Co., expuso que conforme al artículo 167 del C. G. del P., incumbe a las partes probar los hechos alegados en aras de obtener el efecto jurídico perseguido, correspondiéndole al demandado acreditar la prórroga del plazo inicialmente concedido, pero no lo logró.

Que si bien de los interrogatorios se tiene que hubo conversaciones entre las partes, no quedó demostrado ese nuevo pacto, y en todo caso, el supuesto acuerdo estaría condicionado a que el deudor se pusiera al día con los intereses, lo cual no ocurrió, pues aunque el 12 de abril de 2.021 abonó \$40'000.000.00, quedó un restante no cancelado, según su propio dicho.

Sobre la declaración de FRANCISCO JAVIER BOTERO GÓMEZ, aplicó el artículo 211 procesal civil, indicando que es hermano del demandado, aunado a que su declaración no fue exacta ni precisa de cara a la situación de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la presunta prórroga frente al pago que debía hacerse.

Así las cosas, desestimó las excepciones y dispuso seguir la ejecución según el mandamiento de pago, decisión apelada por el ejecutado².

DE LA APELACIÓN:

² Ver audiencia contenida en el archivo 32 E.D.

Volviendo sobre el dicho en la contestación, el recurrente presentó dos reparos, específicamente insistió en las excepciones denominadas *“INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN”* e *“INDEBIDA PRETENSIÓN DE PAGO DE INTERESES DE MORA”*; solicitando apreciar las pruebas según el artículo 176 procesal civil.

Admitida la apelación y corrido el traslado para alegar, el recurrente desarrolló sus inconformidades así:

1. Sobre la *“INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN”*, afirmó que no existe tarifa legal que exija determinado medio probatorio para demostrar la modificación del plazo, la cual está acreditada en la exposición que hizo el demandante y el testigo FRANCISCO JAVIER BOTERO GÓMEZ.

En relación al primero, el demandante, reconoció que hubo múltiples conversaciones en aras del pago de intereses, mientras que en el testimonio del segundo, este declaró sobre el acuerdo y en qué consistía, aclarando que una vez pagados los intereses (en dos cuotas, una abril, y otra en mayo, ambos de 2.021), se otorgaría un plazo adicional de seis (6) meses para el pago del capital; sin embargo, la demanda se presentó en mayo, cuando aún estaba pendiente el plazo para la segunda cuota, desconociéndose el pacto verbal celebrado.

2. En cuanto a la *“INDEBIDA PRETENSIÓN DE PAGO DE INTERESES DE MORA”*, desarrolló el argumento consistente en que si bien la obligación era exigible a partir del 1° de agosto de 2.020, deudor y acreedor continuaron en conversaciones, por lo que el 12 de abril de 2.021, a través de FRANCISCO JAVIER BOTERO GÓMEZ se pagaron \$40'000.000.00, por intereses comprendido hasta febrero de ese año, de lo que se entiende la ampliación del plazo para pagar el capital, y que los intereses de mora sólo empezaron a correr desde marzo de 2.021.

PRONUNCIAMIENTO PARTE DEMANDANTE – NO RECURRENTE:

El ejecutante indicó que la alzada se funda en un hecho que no ocurrió y es carente de prueba, ya que como acreedor nunca realizó pactos verbales tendientes a modificar la fecha de exigibilidad del título; contrariamente, al demandado se le advirtió que ante el impago se iniciaría la acción judicial.

Insiste en que lo alegado sobre un plazo adicional no sucedió, menos de manera verbal, pues tratándose de \$1.400'000.000.00, tendría extrema diligencia, sin que procediera verbalmente sobre condiciones tan importantes como la exigibilidad.

En relación a la exposición de FRANCISCO JAVIER BOTERO GÓMEZ, que este fue dubitativo y no concreto, además está en una situación que afecta su credibilidad e imparcialidad (art. 211 C. G. del P.), dado

su parentesco con el ejecutado, con quien también tiene negocios comerciales.

Por último, que conforme al artículo 225 procesal civil, la prueba de testigos no suple el escrito que la ley exige para la existencia de un contrato, en este caso, el demandante nunca manifestó su voluntad de modificar el plazo concedido en el título valor, siendo aplicable el indicio grave que trata el inciso 2° de esa norma.

Así las cosas, se resolverá la alzada, previas:

CONSIDERACIONES

INTROITO:

Examinada la actuación procesal en ambas instancias, no se observa irregularidad que invalide lo actuado, por lo que están presentes las condiciones necesarias para proferir sentencia de segunda instancia.

Del artículo 320 del C. G. del P., se tiene que el recurso de apelación tiene como objetivo que el Superior estudie la decisión proferida en primera instancia con el fin de revocarla o reformarla, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, todo ello dentro de los límites que impone el artículo 328 ibidem.

En el caso en estudio, los problemas jurídicos a resolver se contraen en establecer si el título base de la ejecución era o no exigible al momento de presentarse la demanda, o si es que existió un acuerdo en los términos aludidos por el demandado que impide entender satisfecho ese elemento -exigibilidad-. Superado lo anterior, nos adentraremos en desde cuándo deben cobrarse intereses de mora.

Para dilucidar lo pertinente, se determinará si el interesado demostró los supuestos de hecho conforme lo normado en el artículo 167 del C. G. del P., en procura de alcanzar lo deprecado.

De la acción ejecutiva y específicamente sobre el requisito de la exigibilidad del título en cobro:

Conforme al artículo 422 del C. G. del P., pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones “*expresas, claras y exigibles*”, que consten en documento que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él. Sobre esos conceptos, la jurisprudencia ha dicho:

“La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.”

*“La expresividad, como característica adicional, significa que la **obligación debe ser explícita**, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. **Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida**.”* Negrilla y subraya en el texto original. Sala Civil, Corte Suprema de Justicia STC13670-2022, donde se cita a la STC3298-2019. Ver también la sentencia T-747 de 2.013 de la Corte Constitucional.

Ahondando sobre la “**exigibilidad**” tenemos:

*“Atinente a la **exigibilidad**, de acuerdo con el artículo 422 del Código General del Proceso, ese requisito se refiere a la obligaciones puras y simples, de plazo de vencido, o, de condición cumplida.*

“(…)

“[D]e acuerdo con el artículo 422 del Código General del Proceso, también son susceptibles de ser cobradas, por vía compulsiva, las obligaciones a plazo”.

“De acuerdo con el Código Civil, el plazo puede ser expreso o tácito, siendo este último el que se entiende o supone, claramente, en qué momento se cumplirá la obligación³”.

*“La **obligación a plazo** se identifica exclusivamente con el tiempo y, es fijado por la Ley, acuerdo de voluntades o, disposición judicial”.*

“Una vez llegada la hora, día, mes o año, nace, por ese solo hecho, el deber del deudor de honrar la obligación y, si así no procede, el acreedor está plenamente habilitado para exigir su cumplimiento por vía compulsiva”.

“Ahora, antes de esa temporalidad definida y, siempre que no se haya renunciado a ésta⁴, la obligación no se puede reclamar y, si el deudor, en todo

³ “(…) Código Civil (...). Artículo 1551. Definición de plazo. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; puede ser expreso o tácito. Es tácito, el indispensable para cumplirlo (...). No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designe, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación; solo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes (...)”.

⁴ “(…) Código Civil (...). Artículo 1554. Renuncia del plazo por el deudor. El deudor puede renunciar el plazo, a menos que el testador haya dispuesto o las partes estipulado lo

caso, lo hace anticipadamente, no habrá lugar a restituirle lo que dio, salvo en las obligaciones condicionales⁵.

“Tal regla encuentra sus excepciones en los eventos del artículo 1553 del Código Civil, las cuales, en todo caso, implican una condición⁶”.

“Sobre la posibilidad de exigir el cumplimiento de una obligación antes del plazo en relación con el citado precepto, la Sala ha manifestado”.

“[E]l artículo 1553 del Código Civil faculta clara e inequívocamente al acreedor para que exija el pago de la obligación, aunque no haya expirado el plazo, cuando el deudor se constituye en quiebra “o se halla en notoria insolvencia”, es decir que reconoce de manera expresa la prevalencia de los efectos del incumplimiento frente al deudor insolvente”.

“La razón de esta disposición –explicaba POTHIER– radica en que «el término concedido por el acreedor al deudor, se considera que tiene por fundamento la confianza en su solvencia; cuando ese fundamento desaparece, el efecto del término cesa». (Tratado de las obligaciones. Buenos Aires: Atalaya, 1947, p. 133)”.

“(…) En otras palabras, si la causa que movió al acreedor a conceder un plazo a su deudor fue la confianza en su solvencia, y esta confianza desaparece por circunstancias objetivas, entonces faltará asimismo el fundamento del plazo, por lo que éste expira y el acreedor adquiere la potestad para exigir el pago del precio (…)”.

“En asuntos mercantiles, específicamente, cuando el deudor huya de su domicilio, disipe sus bienes o los aventure temerariamente, o se halle en estado de insolvencia notoria, no se exige el pago antes del vencimiento, pero el acreedor de una obligación a término tendrá derecho a exigir caución suficiente para garantizar su cumplimiento. (Art. 873 Código de Comercio)⁷”.

“Adviértase, de manera general, el deudor debe cumplir la obligación en el momento establecido porque si se supera del tiempo respectivo sin hacerlo, incurrirá en mora y, sólo bajo supuestos legales o renuncia al plazo, puede

contrario, o que la anticipación del pago acarree al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar (…)”.

⁵ “(…) Código Civil (...). Artículo 1552. Pago anticipado (...). Lo que se paga antes de cumplirse el plazo, no está sujeto a restitución. Esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de condiciones (…)”.

⁶ “Artículo 1553. Exigibilidad de la obligación antes del plazo. El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, si no es: (...). 1.) Al deudor constituido en quiebra o que se halla en notoria insolvencia. (...). 2.) Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido considerablemente de valor. Pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo, renovando o mejorando las cauciones (…)”.

⁷ CSJ. STC11287-2016 de 17 de agosto de 2016, exp. 11001-31-03-007-2007-00606-01.

ser forzado a acatarla antes de tiempo, es decir, aun cuando la obligación existe, solo es exigible en un momento determinado”.

“(…)”.

“Ahora, los requisitos impuestos a los títulos ejecutivos, consignados en el artículo 422 del Código General del Proceso, entendidos como documentos provenientes del deudor o de su causante en donde consten obligaciones claras, expresas y exigibles, por supuesto se trasladan a los títulos valores, cuando los documentos base de la ejecución de la obligación no satisfacen plenamente el formalismo cambiario. En esta hipótesis, compete al juez, efectivizar el derecho de acceso a la justicia, de tal modo, que no puede predicar la inexistencia del título valor porque no se cumpla un formalismo cartulario, sino que en su labor de hacer justicia, debe escrutar si existe un auténtico título ejecutivo. De modo que, si el instrumento no satisface tales presupuestos, no puede sustraerse del análisis material de la obligación y de la concurrencia o no de los requisitos del título ejecutivo para no esquilmar los derechos del acreedor en el cobro coercitivo”. (STC7623-2021).

Tan copiosa cita obedece al primer reparo del recurrente en cuanto que cuestiona directamente la exigibilidad del título que se pretende cobrar⁸, en él consta que el día de vencimiento de la obligación es el 1° de agosto de 2.020⁹, de ahí que el asunto, en principio, es objetivo, pues quedó plasmada la voluntad de las partes de cara a las condiciones que rodearon el mutuo.

De la solución al primer reparo:

Es probable que en el ejercicio de la autonomía de la voluntad (art. 1.502 C.C.), las partes libremente modifiquen las condiciones de sus

⁸ En principio, tal requisito sustancial se analiza por el recurso de alzada, aunque también es criterio jurisprudencial consolidado que al momento de la sentencia, oficiosamente, puede volverse a estudiar los requisitos formales o sustanciales del título ejecutivo, ver entre otras las sentencias STC1018-2023, STC463-2023, STC16731-2022 y la atrás citada STC7623-2021.

⁹ Dicho pagaré obra a folios 9-10 del archivo 02 en el E.D.

acuerdos, siendo de su resorte acordar y determinar el contenido y las particularidades del asunto.

Conforme a lo anterior, de cara a esta inconformidad debemos responder; ¿pactaron las partes, directamente o mediante un tercero, ampliar el plazo inicialmente previsto para la exigibilidad del pagaré?

Para responder, en primer lugar, al hecho 9° de la demanda, se replicó:

“... pues pese a que del texto del pagaré que funge como título base para la ejecución pareciera desprenderse que contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible, la demanda desconoce que gracias a conversaciones verbales sostenidas entre el acreedor y el deudor, aquel había concedido plazo para el pago del capital, especialmente después del pago de la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000,00) mencionada en el pronunciamiento al hecho quinto.

“De suerte que, la exigibilidad de la obligación incorporada en el título había variado, y se extendía mucho más allá del día 12 de abril de 2021, y no se hizo utilización de cláusula aceleratoria alguna por parte del demandante, de manera que a la fecha en que se libró mandamiento de pago la obligación no era aún exigible.” (hecho 9°)

Posteriormente, el demandado sobre el mismo punto, expuso:

“[N]o obstante que la exigibilidad del título se había configurado el día 1° de agosto de 2.020, el señor ANTONIO RAIGOZA continuó mes a mes recibiendo los intereses referentes a la tasa remuneratoria, es decir, del 1.5%, es decir, él ya venía mes a mes ampliando el plazo; sin embargo, ante el pedido del capital, iniciaron una negociación, negociación que quedó estructurada de la siguiente manera.

“Para el mes de abril del año 2.021 se debía entregar al señor ANTONIO RAIGOZA RAMÍREZ, OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$84´000.000.00), a razón de cuatro (4) meses de intereses que se pagaban por adelantado, es decir, enero, febrero, marzo y abril, el pacto consistió en lo siguiente, que los señores CESAR AUGUSTO BOTERO, como deudor, y el señor FRANCISCO BOTERO, como encargado del pago, cancelarían al señor ANTONIO dos (2) meses de intereses en el mes de abril, y dos (2) meses de

intereses en el mes de mayo, los dos (2) meses de intereses están probados en el proceso, fueron efectivamente cancelados el día 12 de abril del 2.021, y cubría los intereses remuneratorios de los meses de enero y febrero, quedando insolutos aun los meses de marzo y abril.

“Efectivamente los señores BOTERO, una vez hecho el pago, hablaron con el señor ANTONIO, le dijeron que si se mantenía entonces en pée la propuesta, la oferta hecha por ellos, que les concediera seis (6) meses para el pago del capital, lógicamente continuarían pagando los intereses remuneratorios, a lo que el señor ANTONIO RAIGOZA asintió, asintió, aceptó la concesión del pago como lo ha manifestado el señor CESAR AUGUSTO BOTERO y FRANCISCO JAVIER BOTERO en esta audiencia en sus declaraciones.

“Es decir, que a partir del mes de abril del año 2.021 corría un plazo de seis (6) meses para cancelar el capital, que serían cancelados es decir, aproximadamente, en el mes de octubre del año 2.021, quedó atado el pacto a que los señores FRANCISCO JAVIER y CESAR AUGUSTO, cancelaran también los otros meses de mora en el mes de mayo, pero resulta que antes de finalizar el mes de mayo, en el día once (11) de ese mismo mes, el señor ANTONIO RAIGOZA, a través de su apoderado presentó demanda ejecutiva, es decir, no se había cumplido la condición en este caso suspensiva del derecho del plazo, no se había cumplido, en el día once (11) de mayo, estaba pendiente de cumplirse porque si quedó de hacerse en mayo, quiere decir que el plazo iría hasta el último día de este mes, entonces, presentada la demanda el día once (11) se presentó sin haber sido exigible, porque el pacto verbal entre ellos había modificado el plazo (...)” Entre corchete adrede. (minutos 6:20 y siguientes de la video grabación del archivo 31 Expediente Digital).

Sobre ese presunto convenio habló el demandado en su interrogatorio, así como FRANCISCO JAVIER BOTERO GÓMEZ, su hermano, en su testimonio, ambos, aunque no detallan el supuesto acuerdo, coinciden en afirmar que el referido plazo estaba condicionado a estar al día en los intereses, situación que reconocen no ocurrió ya que la demanda se presentó sin dar lugar a ello¹⁰.

En relación a dicho arreglo, el actor en su interrogatorio, expuso:

¹⁰ Minutos 29:30 y siguientes del archivo 27 y minutos 08:40 y siguientes del archivo 30, los dos en el Expediente Digital.

JUEZ PREGUNTA: *¿por qué motivo llegó usted a presentar la demanda ante el Juzgado, si las relaciones económicas con el señor CESAR AUGUSTO eran normales?*

RESPUESTA: *“Porque después de hablar mucho con él y tratar de acordar unas formas de pago de intereses siempre estaban atrasados y no se llegó a un acuerdo, y pasaban los meses y los meses y atrasados, atrasados.”*

....

JUEZ PREGUNTA: *“¿Usted ha tenido conversación sobre alguna suma de dinero que se comprometió a pagar el señor FRANCISCO JOSÉ BOTERO, ha tenido usted charlas?”*

RESPUESTA: *“sí, siempre me prometía que me iba a pagar, pero no me pagaba. (...) En abril doce (12) del veintiuno (21) me pagó CUARENTA MILLONES (\$40´000.000.00) por intereses atrasados, los pagos que me hizo siempre fue por intereses atrasados y lo tengo registrado (...) él pagó noviembre y diciembre del año veinte (20)”.*

JUEZ PREGUNTA: *¿El señor FRANCISCO JOSÉ habló telefónicamente con usted por allá en septiembre de 2.020, para negociar alguna deuda?*

RESPUESTA: *“No, él hablaba mucho conmigo para pedirme plazo, siempre me llama para pedirme plazo, pero para negociar deuda no porque lo que negociábamos era los intereses, simplemente él me decía, deme plazo para pagarle esta plata, deme plazo, deme plazo, me volvió a llamar, cuando no cumplía, al otro día me volvía a llamar, vea no pude cumplir y deme otro plazo, y yo le seguía dando plazos y plazos, hasta que ya él a fin no cumplió más nada y ya no me volvió a llamar.”.*

JUEZ PREGUNTA: *¿usted admitió cambiar la fecha del vencimiento del pagaré (...) usted admitió que se cambiaran esas fechas?*

RESPUESTA: *“Nunca, ni siquiera él me comentó nada porque cambiar fechas de pagaré, cuando estamos hablando de interés, es simplemente cambiar fechas de pago de interés, pero nunca de un pagaré, nunca me dijo nada, si lo tiene escrito que me lo compruebe, pero nunca me dijo más nada, solo hablamos de atrasos de intereses, del cual yo le daba plazos y plazos.”.*

JUEZ PREGUNTA: *¿Cuándo se pactó el vencimiento del pagaré, es decir, cuándo deberían pagarle los MIL CUATROCIENTOS MILLONES (\$1.4000´000.00) que le debían?*

RESPUESTA: *“Se supone que al año cuando se firmó”. (minutos 7:10 y siguientes en el archivo 27 del Expediente Digital)*

De lo expuesto se tiene que el arreglo verbal entre las partes o con intermediación de FRANCISCO JAVIER BOTERO GÓMEZ, no existió, del mismo existe controversia por cuanto el demandante lo negó en todo momento, pues si bien admitió que constantemente hablaba con su deudor o su hermano, que ello era exclusivamente en relación a los intereses.

Así las cosas, como lo indicó el *a quo*, no se demostró un acuerdo de voluntades para postergar o conceder un plazo adicional para la solución de la obligación; además, siempre se dijo que el presunto arreglo estaba condicionado a que el deudor estuviese al día con los intereses remuneratorios, cosa que aquí tampoco se acreditó.

No puede desconocerse la fecha de vencimiento contenida por escrito en el pagaré que se arrimó, de donde se tiene satisfecho el elemento de la exigibilidad para el once (11) de mayo de 2.021, fecha de la presentación de esta demanda, por ende, este reparo no prospera.

De igual forma, acertada fue la aplicación del artículo 211 del C. G. del P., ya que ciertamente la credibilidad en la declaración de FRANCISCO JAVIER BOTERO GÓMEZ, estaba afectada en razón al parentesco con el demandado, por lo que en relación a ese punto, no se disiente de lo argüido en la sentencia apelada.

En cuanto a la segunda inconformidad:

Ab initio y reiterado vía alzada, dijo el demandado que el 12 de abril de 2.021, a través de FRANCISCO JAVIER BOTERO GÓMEZ pagó \$40´000.000.00, suma que correspondía a los intereses remuneratorios de enero y febrero de ese año, por lo mismo, alega que la mora sólo empezó a correr desde marzo de 2.021.

En lo tocante a esa entrega económica no existe duda, ya que está la prueba documental de la consignación¹¹ y el propio demandante lo reconoció en su interrogatorio, momento en que también señaló que ese abono fue por “*intereses atrasados*”, especificando que tal monto cubría los meses noviembre y diciembre de 2.020.

Sobre el punto, considera la Sala que incumbía al demandado demostrar el pago de los intereses, al menos con posterioridad a la exigibilidad del pagaré, pues, *¿cómo entender satisfechos los intereses remuneratorios desde la exigibilidad (agosto de 2.020), si no contamos con prueba al respecto?*

Sobre este último cuestionamiento, ciertamente el demandado acreditó el pago atrás reseñado, el de \$40´000.000.00, siendo esa la única probanza sobre la cancelación de intereses, la cual no es suficiente para desvirtuar la afirmación del ejecutante en relación al atraso que al respecto presentaba, ello era un asunto que aquí debió ventilarse con las pruebas pertinentes, y ante su ausencia, no prospera la

¹¹ Ver folio 9 en el archivo 12 E.D.

inconformidad, por lo que la recurrente no podrá obtener el efecto jurídico perseguido.

CONCLUSION:

Si bien en nuestro ordenamiento jurídico existe libertad probatoria, cuando se está en ejercicio de la acción cambiaria (artículo 625 C. de Co.), en virtud del principio de literalidad propia los títulos valores (artículo 626 ídem), el obligado responde conforme el tenor literal del instrumento, y no desvirtuándose lo pertinente mediante los medios probatorios legalmente previstos, los medios de defensa que se presentaran corren la suerte del fracaso.

Por todo lo expuesto, al no prosperar los reparos presentados frente a la decisión de primera instancia, se confirmará la orden de seguir adelante la ejecución; y en cuanto a costas, en atención al artículo 365.3 del C. G. del P. se condena en ellas al demandado, donde como agencias en derecho y en lo que a esta instancia se refiere, pagará al demandante al equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley:

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia calendada el veinticuatro (24) de mayo del dos mil veintidós (2022), proferida por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, según lo motivado.

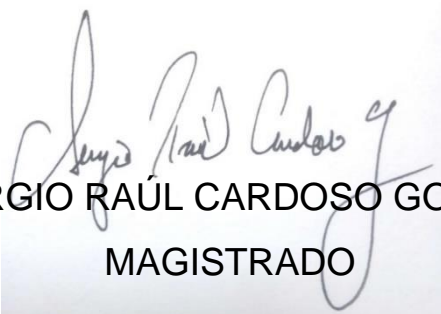
SEGUNDO: Se condena en costas al recurrente y en favor del demandante, donde como agencias en derecho se fija para esta instancia el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

TERCERO: En firma la presente decisión, vuelva el expediente al a quo para lo de su cargo.


Notifíquese:



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
MAGISTRADO



MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ
MAGISTRADO